

Finanzas, trabajo y acomodación social en la España constitucional

Armando Fernández Steinko

Introducción

Debajo de los proyectos europeos compartidos por la izquierda se esconde una Europa real profundamente desigual. Para entender la particularidad de la situación de España en el contexto de la actual crisis resulta clave entender al menos dos aspectos. Estos son: a.) la degradación de su sociedad del trabajo desde los años 1980, es decir, en plena euforia de consolidación democrática y b.) la función que ocupa el capitalismo inmobiliario en la financiarización de su economía y en las estrategias de vida de las clases medias y populares.

La gran coalición monetarista de la transición democrática

La contrarrevolución neoliberal es una agresión de clase contra el trabajo que había venido acumulando “recursos de poder” (Walter Kopy) a lo largo de dos generaciones de desarrollo fordista. Estos recursos se pueden cuantificar en términos de peso relativo de los salarios en el PIB, de niveles de organización sindical o de evolución de las horas de trabajo a la semana. En España esta agresión tiene un matiz políticamente más complejo que en el mayoría de los países occidentales pues forma parte de la estrategia del centro-izquierda española para construir el Estado del Bienestar que demandaba un opinión pública mayoritariamente de izquierdas.

Imposible entender el desmontaje de la sociedad española del trabajo en pleno proceso de consolidación democrática si no se tiene en cuenta un hecho ideológico fundamental: la formación de una gran coalición en temas económicos entre el el liberalismo democrático y el tardofranquismo. Los primeros abrazaron en fechas tempranas la causa del liberalismo económico como estrategia de oposición a lo que entendían como una política intervencionista del Estado franquista obsoleta histórica- y culturalmente. Se da, sin embargo, la paradoja, de que aún cuando el Estado franquista fuera efectivamente intervencionista en lo cultural y lo político además de

fuertemente represivo, desde principios de los años sesenta su política económica estaba en manos de élites de orientación radicalmente liberal en lo económico formadas en los Estados Unidos. Estas eran fuertemente anti-estatistas y anti-colectivistas mucho tiempo antes de que triunfaran las tesis de Milton Friedman y Friedrich von Hayek en la mayoría de los países occidentales. En dichos países, incluso los partidos demócrata-cristianos, fuertemente influidos por las tendencias colectivizadoras de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, apostaban por economías mixtas en las que los estados y las administraciones en general tenían asignado un espacio importante frente a los intereses del capital privado. Nada de esto existía entre las élites de la España franquista que puso en marcha la modernización fordista excepto, si acaso, en el País Vasco y en Cataluña. Cuando a mediados de los años sesenta, en todos los países de Europa Occidental el sector público representaba ya más del 30% del PIB, en España este no llegaba aún al 12%, es decir estaba tres puntos por debajo incluso del de la también dictadura de Salazar en Portugal¹.

La convergencia entre los sectores atlánticos del tardofranquismo y los sectores demócratas liberales consolidó el monetarismo entre las élites españolas, aún cuando incluso ellas aceptaran la necesidad de ir a la construcción de un Estado del bienestar de tipo europeo. Esta alianza logró imponer una transición no rupturista frente la mayoría de la opinión pública en los años decisivos de la transición, una transición particularmente continuista en política económica y, sobre todo, en políticas y culturas empresariales. Dada su temprana inspiración (neo)liberal la respuesta de las nuevas élites frente a la crisis del fordismo, que afectó duramente al tejido productivo español, fue el sacrificio de la sociedad del trabajo, su sustitución por una economía fuertemente dependiente del sector financiero y de las inversiones extranjeras, preferentemente a corto plazo. Su objetivo era financiar un Estado del bienestar,

¹ La deuda pública como porcentaje del PIB también alcanzó mínimos históricos en los años del desarrollismo franquista (del 22% del PIB hacia 1965) Tortella (1994, p. 362)

un Estado del bienestar sin base productiva suficiente para llegar a ser un proyecto sostenible en el tiempo (“Estado del bienestar financiarizado”)².

Economía real y economía de rentas en la historia de España

Hay que tener en cuenta que el problema del *trabajo*, de la economía *real* o *productiva* frente a la economía de rentas, tiene un significado muy especial en la historia de España. El bloqueo crónico del desarrollo del país desde el principio de la Edad Moderna tiene su origen en la destrucción de las clases productivas y en el reforzamiento de las clases rentistas vinculadas a la gran propiedad de la tierra. Este proceso, bautizado por la historiografía como “reseñorialización” o “segunda servidumbre”, también se dio en el Este de Europa por esas mismas fechas (siglos XVI y XVII). Sin embargo, en España adquiere unas características específicas que tienen que ver con las largas guerras contra la dominación musulmana y que llevaron a un debilitamiento de las clases productivas más dinámicas debido a la expulsión de moriscos y judíos. Esto provocó un debilitamiento del *mundo del trabajo* acompañado de un reforzamiento del estamento militar y de la nobleza, una constelación de clase facilitadora del rentismo. La importación de metales preciosos de América no consiguió evitar la bancarrota crónica del Estado pero consiguió prolongar la larga decadencia que vivió el país hasta que el capitalismo llamó a su puerta en el siglo XIX.

La Guerra de 1936 fue un acontecimiento similar de consecuencias comparables en lo que se refiere a la dialéctica entre economía de rentas y economía productiva, aún cuando su contexto fuera completamente distinto. El segundo proyecto republicano había definió el país como “una República

² Esta gran coalición no sólo afecta a las políticas sino también a las personas. Así, los cambios ministeriales en Economía y Hacienda que se han ido sucediendo en los últimos años no ha generado ningún cambio de personas a nivel de vicesecretarías de Estado, de directores generales o inspectores del Ministerio de Economía y Hacienda. Todos estos cargos resultan decisivos para implantar las políticas económicas de un determinado gobierno. Todo el aparato estatal vinculado a la economía está hoy bajo control de los monetaristas: es una gran coalición.

democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia" (Art. 1 de la Constitución de la República de 1931). Las fuerzas fascistas no persiguieron sólo su derrota militar sino la liquidación de los espacios de socialización de las clases trabajadoras, especialmente de aquella parte más cualificada de las mismas concentradas en las provincias más desarrolladas³⁴. El franquismo recibió el apoyo de una parte del empresariado y de prácticamente todas las clases rentistas. Fue muy consciente del significado político que en la historia del país tiene el *mundo del trabajo* no sólo por su fuerte militancia republicana, sino por su capacidad de forzar un cambio sustancial de las grandes correlaciones de clase del país.

Es sobre este trasfondo histórico que gana un significado político muy particular la gran coalición monetarista de la transición. La temprana financiarización de la economía y de la sociedad españolas provocó una vuelta paulatina a una sociedad de rentas que, con los años, se fue haciendo cada vez más dependiente de las plazas financieras internacionales. Sus consecuencias son extraordinarias y persistentes. La incorporación y el mantenimiento del país en la OTAN, por ejemplo, que coincide con el cambio político hacia el monetarismo a partir del segundo gobierno de Felipe González, o el pánico desatado en febrero de este año por los rumores procedentes de los mercados financieros deben ser interpretada en este contexto: la dependencia de las políticas públicas españolas de los mercados financieros es extraordinaria y esta dependencia hipoteca tanto la neutralidad militar del país como sus políticas sociales⁵. Los atlantistas a ambos lados del Océano han recompensado con creces a la clase política española por su aportación al reforzamiento de sus intereses en Europa dándoles a muchos de sus cuadros (Javier Solana, Pedro

³ Ver P. Preston (1994)

⁴ Ver G. Brenan (1943) y Fernández Steinko (1997) respectivamente. La parte más política de la obra de Brenan nos parece poco rigurosa, no así su análisis histórico-social de España que sigue contando con el reconocimiento de los especialistas. Sigue siendo una buena introducción a los antecedentes de la Guerra Civil Española.

⁵ Ora razón importante es que la permanencia en la OTAN permitía desviar la actividad del estamento militar español del golpismo hacia compromisos militares exteriores. Esta política ha sido exitosa: se puede decir que hoy ha dejado de ser una entidad política relevante.

Solbes, Rodrigo Rato o Joaquín Almunia) puestos políticos y económicos clave como son la Secretaría General de la OTAN, la responsabilidad de la política exterior de la Unión Europea, la dirección general del Fondo Monetario Internacional y el comisariado de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Competencia. Desde mediados de los años ochenta el peso relativo del sector financiero, así como el de la construcción que está fuertemente unido a él, ha ido aumentando su peso dentro de la estructura económica del país. Los diferentes gobiernos socialistas ciertamente se abstuvieron de hacer políticas industriales, de intervenir de forma activa en el tejido productivo del país y más bien fomentaron la venta, en buena parte especulativa, de su sustrato productivo público y privado más dinámico. Sin embargo desarrollaron políticas muy activas tendentes a mantener la propiedad nacional de su sistema financiero, a rescatar con dinero público a muchos de los bancos víctimas de las crisis bancarias de principios de los ochenta y noventa, tratando a sus banqueros casi como ministros en la sombra y asignándoles competencias relevantes en el Banco de España, hasta el punto de convertir a algunos de ellos, de hecho, en las máximas autoridades monetarias del país⁶. La continuidad de su poder político, que no sólo se plasma en una gran afinidad entre las políticas económicas de centro-izquierda y centro-derecha sino también en la continuidad de innumerables cuadros políticos (secretarios y subsecretarios de Estado de Economía y Hacienda, inspectores de hacienda etc.), ha sido decisivo para la consolidación de la gran coalición monetarista a lo largo de treinta años de andadura democrática.

Capitalismo feo

Las consecuencias de este ataque al mundo del trabajo y, por extensión, a la producción y a la *economía real* del país, han sido considerables. Primero provocó una degradación en tiempo récord del empleo y de las condiciones de

⁶ Ver los trabajos de Josep Manuel Novoa que reconstruye este proceso con suma meticulosidad: *El Poder* (Foca, Madrid 2001), *El botín de Botín* (Foca, Madrid 2003) y *Bancos, Banqueros y Bandidos* (Foca, Madrid 2009).

trabajo, así como un reforzamiento de los sectores menos innovadores y más inmovilistas dentro del tejido empresarial español que obtienen su rentabilidad no con la elevación del valor añadido o con el incremento de la productividad, sino con la flexibilización y la dualización del mercado de trabajo (subcontratación generalizada de tareas y departamentos enteros), en la intensificación del trabajo, en altos consumos energéticos y en la competencia en costes⁷. En segundo lugar se basa no en su transformación organizativa interna (nivelación de las jerarquías empresariales, aumento de la autonomía de los eslabones inferiores) sino en una fuerte dispersión en el espacio de las cadenas de valor añadido derivada de agresivas políticas de subcontratación. En tercer lugar crea empleo preferentemente en sectores ambientalmente insostenibles como el de la construcción, el turismo de masas y el del automóvil, cuyo uso se convierte en una pieza clave para movilidad en el contexto de la mencionada dispersión espacial de las cadenas de valor añadido⁸. Estas estrategias empresariales no sólo dualizan los mercados de

⁷ La productividad relativa del trabajo en España ha caído drásticamente desde el año 2000 con respecto a la norteamericana y a la de otros países europeos. La *productividad total de los factores* no sólo no ha crecido en términos relativos sino que se ha caído en términos absolutos desde los años de la especulación inmobiliaria. De una población activa de unos 20 millones hay 5 millones de trabajadores con contrato temporal, más del 25% del total, una parte muy importante de los mismos, afectan a jóvenes con estudios superiores. 1,5 millones de trabajadores tienen un salario por debajo del mínimo interprofesional y el salario de las mujeres está un 30% del de los hombres. Las jornadas de trabajo son de las más altas de Europa especialmente si se contabilizan los tiempos de desplazamiento al trabajo. La participación de los adultos en la educación y la formación (*lifelong learning*) es menos de la mitad de la que se da en la media de la UE y la remuneración horaria de los trabajadores manufactureros medida en paridades de poder de compra, es la más baja de la UE-15, sólo superada por la que se da en Grecia. A diferencia de Grecia, sin embargo, España es un país más “destradicionalizado”, es decir, con un sector no tradicional menos importante con lo cual el salario tiene una importancia superior para la reproducción social. Ver Navarro et al. (2008), Malo de Molina (2009) y European Commission (2006). Lo más significativo de estos datos es que se dan en un país cuyo producto interior bruto ha crecido significativamente en los últimos años: se trata de un crecimiento sin desarrollo, el mismo modelo que las fuerzas democráticas intentaron derrotar durante la transición política.

⁸ Entre 1996 y 2004 el sector de la construcción ha aumentado de 1,5 a 2,5 millones de personas y el de la hostelería de 970 mil a 1,4 millones. El sector de los servicios protección y seguridad da empleo a casi 400.000 trabajadores pero sólo hay 39.000 trabajadores empleados en la rama de la investigación y el desarrollo aún cuando su número se haya más que duplicado desde 1996. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

trabajo creando condiciones laborales muy diferentes dependiendo del nivel de subcontratación. Además consumen grandes cantidades de espacio, alargan los tiempos de desplazamiento al trabajo y generan un aumento de los consumo energéticos y de las emisiones de CO₂⁹. Es capitalismo, sí, pero no sólo eso: además es *capitalismo feo*. Feo no sólo por la escasa calidad del diseño industrial y arquitectónico ideado por sus ingenieros y técnicos. Feo sobre todo por la dejación que un sistema empresarial tan atomizado como este hace del conjunto del espacio urbano y natural, feo por la falta de una racionalidad colectiva que lo regule y supervise, feo por la dinámica de apropiación de todo lo compartido que genera un sistema de esta características.

Sin embargo este modelo de producción ha generado una economía extraordinariamente *flexible* que se acerca mucho al modelo ideal de economía “abierta” y disciplinada desde el punto de vista presupuestario que propagan los clásicos del neoliberalismo. Durante mucho tiempo el país consiguió alcanzar un superávit de las cuentas públicas a pesar de tener un desempleo crónico que ronda el 10% y gracias a su milagrosa capacidad de convertirse en el país de la UE con el porcentaje más bajo de gasto social. También fue capaz de generar en poco tiempo la mitad de todo el empleo creado en Europa, como sucedió entre 2000 y 2006, aunque también de destruirlo a la misma velocidad, es decir, con la misma *flexibilidad*¹⁰. Esto explica que su nivel de *apertura* y su desregulación sea sistemáticamente elogiada por los organismos financieros internacionales. La otra cara de la moneda es que, dada su baja productividad en relación a sus niveles de consumo, ha generado el déficit comercial más alto

⁹ España es el país de la UE que más se ha alejado de los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero a los que se había comprometido en KYOTO. Sus emisiones: los incrementos acordados eran del 15% para el período 1990-2012 y en 2007 este aumento ya había llegado al 52%. La fuerte presencia del sector de la construcción, que incluye la producción de cemento, así como su modelo de transporte privado y de mercancías son los principales. Ver http://www.tecnicoentral.com/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=2

¹⁰ Se calcula que puede llegar a alcanzar la cifra de 4 millones en los próximos meses hoy está en 3,5 millones, un 15% de la población activa. Las dos últimas crisis cíclicas generaron niveles de desempleo: del 22% en 1985 y del casi 24% en 1994. Algunos estudios presagian un aumento del desempleo en 2010 hasta alcanzar el 20%

de todo el mundo con más de un 10% del PIB en 2007, el doble del déficit comercial de los Estados Unidos (5,3%) y cuatro veces más elevado que el italiano (2,5%). El reforzamiento de la economía de rentas frente a la economía productiva tiene, además consecuencias políticas de largo alcance. Por un lado ha obligado a privatizar una tras otras las empresas públicas más rentables (Repsol, Endesa, Telefónica, Banco Hipotecario etc.) con el fin de pagar, al menos un par de años más, un sistema de bienestar crónicamente insostenible por falta de base productiva suficiente. Por otro lado explica, al menos en parte, la agudización del conflicto nacional que desde el siglo XIX se ha solapado con la vieja tensión entre la economía de rentas que ha dominado durante largo períodos en Madrid, y la economía productiva dominante en el País Vasco y - aunque cada vez menos- también en Cataluña, ambas de inspiración más colectivista. Este conflicto alcanzó su cénit durante el segundo período del gobierno de José María Aznar provocando un reforzamiento del independentismo en ambas nacionalidades históricas.

El neoliberalismo genera incertidumbre, degrada la calidad de vida y destrozo ambiental. Pero cuando no se forman mayorías suficientes para derrocarlo las clases populares desarrollan estrategias de vida para acomodarse a sus dictados. Los gobiernos neoliberales son conscientes de ello y aplican políticas tendentes a reforzar dichos mecanismos de acomodación para así generar apoyos más o menos pasivos y poder conservar su hegemonía. La gran contradicción política dentro de la izquierda española es que la implantación de la ortodoxia monetarista ha sido la herramienta elegida para construir un Estado del bienestar. Una parte sustancial de los recursos ha tenido que ser destinada a subsanar las consecuencias de la destrucción de la sociedad del trabajo provocada por el mismo monetarismo que pretende financiar el coste de la destrucción de la sociedad del trabajo (desempleo crónico, aumento del gasto en medicina y bajas laborales, aumento de la factura energética etc.). No obstante, y a pesar de sus limitaciones, el *estado del bienestar financiarizado* ha dejado un rastro profundo, especialmente en el campo de la sanidad y de la educación. Ambos han conocido una expansión revolucionaria, particularmente

entre la población femenina. Sería imposible entender la capacidad de la sociedad española de resistir al largo invierno neoliberal sin tener en cuenta este hecho.

El problema es la inviabilidad a medio plazo de esta fórmula que es algo así como un compromiso entre las clases rentistas, el empresariado menos innovador y un sector de las clases populares y trabajadoras. El aumento de las cualificaciones en un contexto de degradación persistente de la sociedad del trabajo agudiza una tensión que duerme en toda sociedad capitalista: por un lado la elevación de la educación genera sujetos potencialmente libres y autodeterminados dentro y fuera del trabajo. Sin embargo, la falta de democracia en su sistema económico y empresarial bloquean la posibilidad de que estas posibilidades reviertan positivamente en la vida laboral de las personas. En España, millones de jóvenes relativamente bien formados no tienen hoy ninguna posibilidad de traducir sus saberes en trabajo de calidad y muchos ni tan siquiera pueden convertirse en personas económica (y psicológicamente) autónomas, personas realmente autodeterminadas. Esto genera un caldo de cultivo contestatario que explica tanto las manifestaciones de protesta en Grecia hace algunos meses como las movilizaciones contra la guerra en España en ciudades con alta concentración de estudiantes universitarios¹¹. La temporalidad en el trabajo retrasa la edad de emancipación, hunde la tasa de natalidad y hace productivamente “innecesarios” muchos de los saberes generados por el sistema público, una situación a la que el actual gobierno español quiere hacer frente con la disculpa del Plan Bolonia para organizar la reducción del acceso de las clases populares a la universidad¹². Esto es una destrucción de una de las principales conquistas de la transición y que busca legitimar con la aparente falta de demanda de cualificaciones superiores por parte del sistema empresarial español. Es cierto que no existe esta demanda, pero también es cierto que el sistema empresarial no tiene que

¹¹ Grecia y España son los dos países de la UE con más desempleados entre los titulados superiores (Grecia: 7%, España: 6,2%). La media de la UE 15 está en el 4,3%. Navarro et al. (2009, p.129)

¹² Ver Fernández Steinko (2003)

ser necesariamente una variable independiente e intocable por los poderes públicos que es lo que pactó la gran coalición monetarista que hegemonizó la transición democrática. Pero a parte del (precario) Estado del bienestar, que aunque financiado con endeudamiento en los mercados financieros le hay dado un respiro político de una generación y media a la monarquía parlamentaria, hay otros mecanismos que les han permitido a los partidos de centro mantener su hegemonía durante el largo invierno neoliberal: los bienes inmuebles y el sistema español de *finanzas populares*.

Inmobiliarias y finanzas populares

La crisis de las subprime, vinculadas a créditos hipotecarios marca el final de un ciclo de sobreacumulación de capital financiero y productivo en el mundo y el comienzo de su destrucción más o menos controlada y más o menos manipulada con procedimientos contables. Hasta ahora, el sector bancario español no se ha visto arrastrado como el de otros países a una situación así. Esto vino alimentando un optimismo injustificado por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, fuertemente hegemonizado aún por los monetaristas, que le hizo perder un tiempo precioso para reaccionar con realismo frente a la crisis. Lo específico de la situación de las finanzas españolas son dos cosas: a.) que el sistema financiero español ha logrado retrasar y dilatar en el tiempo la destrucción de capital sobreacumulado; y b.) que la crisis de la economía productiva, que se está traduciendo en un aumento muy rápido del desempleo, ha llegado no después sino antes que la crisis financiera siguiendo un orden justamente inverso al que siguió en la mayoría de los países occidentales.

La aparente solidez del sistema financiero español tiene varias explicaciones. Por un lado, el hundimiento del sistema productivo español entre 1978 y 1985 arrastró a la quiebra a 58 bancos que concentraban el 27% de todos los recursos ajenos y del empleo en el sector, 28 de esos bancos (14% de los recursos ajenos del empleo total) fueron intervenidos por el Banco de

España en esos años¹³. Con la segunda gran crisis económica de la democracia, la de 1992-1993, que también estuvo unida al pinchazo de una burbuja inmobiliaria e hizo trepar el desempleo casi hasta el 24%, se produjo una segunda crisis bancaria que arrastró a la ruina a uno de los principales bancos del país (el Banco Español de Crédito). No está muy claro el papel que jugaron las autoridades monetarias españolas en el desencadenamiento de la crisis del Banesto e incluso hay indicios de que se trató más de una operación política destinada a cortar de cuajo las ambiciones políticas de Mario Conde, que de un verdadero agujero patrimonial como señalaron las autoridades monetarias en su momento. En cualquier caso, para salvarlo se consumieron 1.100 millones € del Fondo de Garantía de Depósitos tras lo cual fue comprado a precio de saldo por el ahora principal banco del país, el Santander. Todas estas experiencias obligaron al Banco de España a aumentar los mecanismos anticíclicos de prevención de riesgos, elevar la supervisión bancaria y las provisiones del Fondo de Garantía de Depósitos por encima de lo que suele ser habitual en la mayoría de los países capitalistas desarrollados. Es verdad que en situaciones de crisis estas provisiones menguan rápidamente si no se soluciona el problema del desempleo que amenaza con desbordar el déficit público. Pero al menos el gobierno pudo evitar que la crisis financiera estallara antes de la crisis de la economía real. Hay otra razón que explica la aparente estabilidad relativa del sistema financiero español: el peso que tienen las cajas de ahorros dentro del sistema financiero español.

Las cajas de ahorros se crearon en todos los países europeos para reducir la incertidumbre y la inseguridad de las clases populares (mujeres sin profesión, menores de edad, trabajadores domésticos, artesanos y jornaleros etc.) por medio del fomento del ahorro. Sin embargo, en la mayoría de ellos las cajas acabaron funcionando como fuente de acumulación de pequeños capitales destinados a reforzar el impulso del incipiente capitalismo y a financiar el sector público. También este era el sentido que quisieron darle a las cajas de ahorros los gobiernos liberales españoles del siglo XIX. Pero no lo consiguieron

¹³ Rodríguez et al. (2008, pp.324).

nunca del todo. Su contenido benéfico y social, así como su fuerte relación con los municipios, nunca han dejado de ser decisivos a pesar de los intentos de conectarlas y subordinarlas una y otra vez a las *grandes finanzas*, a la banca privada¹⁴. Sólo la situación creada tras la Guerra Civil permitió organizar su “represión financiera y el secuestro por parte del Estado de su obra social”¹⁵. Además, desde 1985 las cajas de ahorros son casi los únicos espacios empresariales con órganos de gobierno más o menos democráticos. En ellos tienen representación los gobiernos locales y autonómicos elegidos por los ciudadanos (entre el 20 y el 60% de todos los consejeros) e incluso los representantes de los trabajadores (entre un 5% y el 15%). A pesar de que el Partido Popular dio algunos pasos hacia su transformación en instituciones financieras convencionales permitiendo la emisión de cuotas participativas, ni siquiera la derecha tocó ni su particular naturaleza ni su inserción en el tejido local y comarcal, entre otras razones porque servían para organizar operaciones encubiertas de financiación de los partidos políticos que conducen a una incesante procesión de escándalos de corrupción. El peso de las 46 cajas de ahorro españolas no sólo es grande, sino que ha ido en aumento en los últimos años. Su número y su tasa de beneficios han sido superiores que en el sector privado desde el siglo XIX. Antes de la crisis concentraban el 52% de los depósitos totales, daban trabajo a casi 120.000 personas y disponían de una red de 22.400 sucursales, la más tupida de Europa. El denso tejido de sucursales refuerza su posición frente a la banca privada española y extranjera en la captación de los fondos de las clases medias y populares¹⁶ y las necesidad legal de destinar al menos el 50% de los beneficios a reservas les ha dado tradicionalmente una solvencia y una solidez superiores a las de la banca privada. El mercado no ha conseguido romper este tupido tejido lo cual demuestran en la práctica que la propiedad privada de las empresas no es más sino menos rentable, especialmente si tenemos en cuenta que la rentabilidad

¹⁴ La Ley liberal de 1853 es un buen ejemplo de ello.

¹⁵ Comín Comín, F. (2008, pp. 227ss.). Ver también Rodríguez et al. (2008, cap. 9), Forniés Casals (1991) y Titos (1991).

¹⁶ Rodríguez et al (2008, p. 253)

social de las cajas ha sido decisiva para compensar la ausencia de Estado redistributivo en la historia del país prácticamente hasta 1978.

Esto no quiere decir que sean inmunes a la crisis como sugirieron las afirmaciones triunfalistas de algunos economistas próximos al gobierno en esos primeros meses tan decisivos de la crisis. No lo pueden ser porque tampoco las cajas tienen debajo un sistema productivo sostenible aún cuando las cláusulas legales las blinden de la especulación financiera. En primer lugar la debilidad de la sociedad del trabajo ha generado graves problemas de financiación en los ayuntamientos con lo cual estos han forzado a las cajas en las que tienen una importante representación, a aprobar créditos para el desarrollo de actividades inmobiliarias locales de dudosa solvencia y terrorífico impacto ambiental. Los créditos para actividades inmobiliarias se han multiplicado por diez en tan solo ocho años mientras que el patrimonio de las instituciones financieras sólo lo ha hecho por dos. Esto está generando un grave problema de insolvencia de consecuencias devastadoras a medida en que aumenten los impagos de las promotores inmobiliarios pequeños y medianos y a medida en que el Estado agote sus recursos para rescatarlas o avalarlas. Los síntomas empezaron a aparecer en el horizonte hacia mediados de 2009 cuando los precios de los pisos ya había caído más del 20% y el stock de pisos vacíos era de casi 1,5 millones. En segundo lugar la deficiente regulación de la financiación de los partidos políticos convirtió a las Cajas en el centro de su financiación ilegal o encubierta, alejando su gestión de la profesionalidad, convirtiéndolas en el centro de transacciones políticas ocultas para saldar las deudas contraídas por los partidos políticos, y alejándolas de los objetivos sociales para las que habían sido creadas. En tercer lugar las cajas no pueden captar capital tan fácilmente como la banca privada. La emisión de cuotas participativas no ha dado resultado pues no se traduce en derechos políticos para los inversores con lo cual, en situación de crisis, necesitan recurrir al Estado incluso antes que

aquella¹⁷. Esto es lo que estaba pasando en febrero-marzo de 2009: las cajas, tanto las grandes como las pequeñas, acaparaban por esas fechas el 70% de la liquidez adicional inyectada en el sistema financiero por el gobierno provocando un vertiginoso aumento del déficit y de la dependencia del Estado del mercado de deuda pública que ha llevado al gobierno Rodríguez Zapatero a tomar medidas radicales tendentes a tranquilizar a los mercados financieros y evitar así que aumente el coste de la deuda pública española. En cuarto lugar muchas cajas de ahorros han conseguido financiación exterior a cinco años en los años del boom inmobiliario de forma que muchos de los créditos interbancarios contraídos han ido venciendo a partir de 2009, lo cual ha provocado una enorme alarma justamente a raíz de la simbólica cumbre de Davos en enero de 2010¹⁸. Es probable que algunos de estos créditos no se puedan devolver, lo cual podría contagiar a algunos bancos europeos y poner al límite la capacidad de ayuda del Estado¹⁹. El Fondo de Garantía de Depósitos puede verse rápidamente desbordado, especialmente si las grandes cajas (La Caixa o Cajamadrid) necesitan hacer uso de sus fondos. En ese caso el modélico sistema financiero español también acabaría sucumbiendo a la crisis con el agravante de que lo hace en un largo declive de su maltratada sociedad del trabajo.

Algunas cajas han sido forzadas por el gobiernos a que iniciado un proceso de fusiones para así adelantarse a lo que pueda venir después de que las agencias internacionales elevaran su calificación de riesgo²⁰. Algunos expertos consideran que la situación del sistema financiero español podría llegar a ser aún más crítica que la que viven los Estados Unidos si los precios de

¹⁷ Por ahora el intento de capitalizarse emitiendo cuotas participativas, la fórmula propuesta por el gobierno del Partido Popular para hacerlas más “competitivas”, ha fracasado completamente. Recalde (2007)

¹⁸ Este dato se lo debemos a Javier Navascués.

¹⁹ Sería importante hacer una evaluación de la deuda contraída por las cajas españolas con la banca privada europea durante el período comprendido entre principios de 2004 y mediados de 2006 con el fin de poder evaluar las posibilidades de contagio de esta última con bienes con créditos envenenados por el desplome de los precios de los bienes inmuebles españoles.

²⁰ El caso más actual es el de la Caja de Castilla-La Mancha que se va a fusionar co la mayor caja andaluza, Unicaja.

los bienes inmuebles siguen desplomándose, lo cual la negativa del gobierno a generar indicadores fiables destinados a hacer un cálculo del valor real de mercado de muchos bienes inmuebles²¹. Esta posibilidad explica la iniciativa que han tomado las cajas de ahorros más pequeñas con la creación de una sociedad gestora que tiene como objetivo centralizar las viviendas imposibles de vender por ahora con el fin de retener y controlar su salida al mercado y así intentar evitar que se desplomen aún más los precios²². La manipulación de sus balances mediante compras de pisos-basura también puede retrasar ese momento, pero no impedirlo.

²¹ Recalde (2007).

²² Aún así todo: las cajas ya calculan descuentos del 25% del valor inicial de los pisos. “Las cajas se unen para vender sus pisos y reducir el riesgo”. El País 6 de marzo 2009.

II. Luna de miel, fin de fiesta y las salidas

Luna de miel entre clases populares y clases rentistas

El sector de la construcción y su conexión con un sistema financiero muy particular es lo que mejor sintetiza la actual situación económico-social española, sus origen histórico y su vulnerabilidad presente. Las débiles políticas de bienestar de los años de Franco debidas a la falta de pacto social entre clases populares y clases propietarias, y a las convicciones radicalmente antioletolectivistas de sus élites, obligaron desde hace cinco décadas a las familias españolas a invertir en bienes inmuebles, es decir, a convertir la casa en algo más que en un medio para satisfacer una necesidad vital inmediata. Las cajas de ahorros, y no la banca privada, fueron las instituciones que canalizaron la mayor parte del ahorro popular hacia la adquisición de estos bienes, lo cual redundó en beneficio de los pequeños ahorradores y de los ayuntamientos. La crisis de la sociedad del trabajo de los años ochenta acentuó esta dependencia de las inversiones inmobiliarias. Esto ha llevado con los años a una situación única en el mundo: prácticamente el 90% de las familias son propietarias de sus viviendas principales, el 77% de las cuales están ya completamente pagadas. Las actividades especulativas de las clases rentistas provocaron escaladas de precios y burbujas inmobiliarias de las que también salieron ganando en cierta forma las clases populares. Las fuertes subidas de los precios de las viviendas no sólo han retrasando la edad de emancipación de los jóvenes hundiendo la productividad y la tasa de natalidad del país. También ha "capitalizado" a los hogares españoles cuyos activos netos llegaron a alcanzar hasta el 500% del PIB. Los bienes inmuebles son el as que tienen escondidos las clases populares españolas debajo de la manga, un mecanismo de compensación de la desigualdad social y de la degradación de la sociedad del trabajo. La riqueza

inmobiliaria representa en España el 88% de la riqueza no financiera de las familias, el porcentaje más alto de todos los países incluidos en el estudio publicado por la Universidad de Naciones Unidas en Helsinki²³. Esto contribuye a reducir las desigualdades sociales en un país con una sociedad del trabajo por los suelos aunque sin tener que vincularse demasiado a las altas finanzas a las que, sin embargo, sí está expuesto el *Estado del bienestar financiarizado*. La apuesta por los bienes inmuebles financiados a través de las cajas, frente a los productos financieros -financiados preferentemente a través de la banca privada- como forma de ahorro familiar, le da a las familias españolas un colchón de seguridad que no tienen en países con sistemas laborales igual o más precarios como los EEUU, donde las familias populares también invierten en bienes inmuebles, pero en donde los productos financieros tienen un peso mucho más importante dentro de sus estrategias de ahorro.

Los espejismos ideológicos que pueden llegar a crear una situación así son evidentes. Las redes de solidaridad familiar permiten utilizar el patrimonio inmobiliario de los parientes como aval para adquirir una segunda residencia o para solicitar un crédito personal. Dos tercios de las viviendas nuevas compradas son segundas residencias destinadas a inversión, es decir, su objetivo es compensar la falta de seguridad en el trabajo con lo cual, en caso de desahucio, no se queda nadie realmente en la calle. Esta constelación de prosperidad fraguó una alianza entre clases rentistas y clases trabajadoras única en la historia del país debilitando un ciclo político prometedor para la izquierda en la segunda mita de los años ochenta. Pero la situación ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Las deudas contraídas han aumentado en poco tiempo del 40% al 80% del PIB mientras el patrimonio neto de las familias

²³ Davies et al (2006), tabla 3. Sólo Nueva Zelanda tiene un porcentaje igual. Sin embargo, aunque también en países como Italia y los Estados Unidos este porcentaje también sobrepasa el 80%, en ninguno de los países estudiados –si exceptuamos los países del Este de Europa- el ahorro familiar materializado en bienes inmuebles tiene tanto peso en relación con el ahorro financiero como en España (España: 2,8, Italia: 2,0, Alemania: 1,75, EEUU: 1,3, Reino Unido: 1,3, Francia: 1,2)

destinado a respaldar esas deudas ha caído del 500% al 350% del PIB²⁴. Es el fin del capitalismo popular inmobiliario, de la alianza entre rentistas y trabajadores.

Crisis del bloque histórico monetarista

La caída del PIB ha sido la más rápida desde la Guerra Civil y el desempleo ronda de nuevo el 20% de la población activa en 2010. Con ello se repite, por tercera vez, el mismo patrón de contracción violenta de un tejido empresarial tenido por modélicamente *flexible*. El gobierno de Rodríguez Zapatero, desbordado por la magnitud de la crisis, está tomando medidas similares a las de otros gobiernos, pero la división interna de su gabinete, la falta de criterios alternativos a los dictados por la teoría monetarista y la naturaleza *financiarizada* del Estado del bienestar español ha reducido enormemente su capacidad de maniobra. En un principio la dinámica de la crisis le llevó al gobierno de Rodríguez Zapatero a radicalizar sus medias anticíclicas rompiendo muchos de los dogmas monetaristas y cambiando al todopoderoso ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes por otro con un perfil menos definido como la Ministra Helena Salgado. Pero un cambio tan tentativo resultó totalmente insuficiente para contrarrestar la virulencia de la crisis. El déficit público aumentó rápidamente hasta alcanzar el 10% en 2010, el más alto de los países de la OCDE, pero no sería tan grave si este aumento no se produjera sobre una sociedad del trabajo crónicamente en ruinas y, por tanto, sin capacidad ninguna de contrarrestarlo a medio plazo. Además, las solidaridades familiares tienen sus límites y hoy existen ya más de 1.000.000 de hogares en donde todos sus miembros están desempleados. Un colectivo especialmente afectado, protagonista decisivo de la luna de miel entre clases

²⁴ Recalde (2008, p. 13). Uno de los máximos especialistas españoles en burbujas inmobiliarias, Ricardo Verges, viene avisando desde hace años de las dimensiones de la burbuja inmobiliaria sin haber recibido la atención que merecía. Véase su página web <http://www.ricardoverges.com/> así como: <http://www.ricardoverges.com/pdf/Factura.pdf>

rentistas y clases populares, es el de la nueva clase de autónomos vinculados al sector de la construcción. Muchos de sus miembros proceden del proletariado, estaban organizados en sindicatos e incluso votaban a la izquierda. El desempleo y la crisis de 1993 los arrojó a la cuneta de la sociedad pero el boom inmobiliario les permitió convertirse en microempresarios, les abrió oportunidades de promoción social y les hizo abrazar valores competitivos y privatizadores. Sus votos fueron decisivos para que la derecha neoliberal ganara las mayorías absolutas en la costa (Comunidad Valenciana, Murcia, provincias de Málaga y Almería) pero también en la Comunidad de Madrid. Su número ha aumentado de forma espectacular entre 1999 y 2007 aunque desde 2008 han pasado a engrosar las filas del desempleo de forma igualmente rápida²⁵. Son el “Joe el fontanero” de la campaña presidencial de McCain en los Estados Unidos y en Italia tienen su equivalente en una parte de ese 26% de trabajadores autónomos que forman el núcleo de la (nueva) base electoral de Berlusconi.

Debajo los espejismos ideológicos generados por el capitalismo inmobiliario duerme el problema de fondo: la debilidad de la sociedad del trabajo que empuja a las familias de las clases populares a hacer negocios inmobiliarios de la misma forma que en otros países las empuja a hacer negocios financieros. Igual que para el Estado español, esta economía sin trabajo digno y estable sólo puede basarse en endeudamiento, en su creciente dependencia del sistema financiero. En España no son las *altas finanzas* sino las cajas de ahorros las que han generado esta dependencia, lo cual les ha proporcionado un cierto respiro. Pero es un respiro temporal. En su día la peseta no pudo soportar el endeudamiento de los años ochenta y menos aún la presión especulativa desatada en 1992. La incorporación al euro y la bajada de

²⁵ En 1999 había 220.000 empresas de este tipo en todo el país con sus respectivos empresarios que daban trabajo a 280.000 personas, la mayoría de nacionalidad española. En 2008, había 650.000 empresas con sus respectivos “nuevos empresarios autónomos” en las que trabajaban 650.000 personas, la mayoría extranjeros, es decir, tres veces más que sólo diez años antes. Todo este sistema social se está viniendo abajo como un castillo de naipes en pocas semanas. Fuente: Directorio Central de Empresas, Instituto Nacional de Estadística (<http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=9>)

los tipos de interés del Banco Central Europeo, que abrió una nueva ronda de endeudamiento masivo que duró media generación, volvieron a hacerlo milagrosamente posible. El sistema monetario español agotó su margen de maniobra para alimentar una sociedad de rentas pero el euro tomó su relevo. El proyecto neoliberal europeo ha contribuido así a mantener los viejos problemas históricos del país reforzando la gran coalición monetarista que secuestró la transición democrática y posponiendo un cambio económica estructural que, en rigor, le había correspondido hacer a la sociedad española de la mano de la transición democrática.

Es aquí, en todo esto, donde radica el significado profundo de la actual crisis para las grandes dinámicas sociales y políticas del país. Lo nuevo no es el rápido aumento del desempleo y el intento de utilizar una coyuntura económica adversa para precarizarlo aún un poco más. Es la tercera vez que sucede a pesar de todas las reformas del mercado de trabajo que se han llevado a cabo, presuntamente para impedir una nueva escalada en el aumento del desempleo. Lo nuevo tampoco es la crisis de su sistema financiero que afectó a más de un cuarto de sus depósitos en la crisis de 1978-1985 y -aunque con reservas- a uno de los bancos más importantes del país en 1993. La crisis inmobiliaria podría tocar seriamente a las cajas españolas y poner fin al particular sistema español de finanzas populares y regionales. Pero tampoco eso marcaría un cambio radical en las grandes tendencias de fondo. Lo que sí podría apuntar a un cambio histórico es *la posibilidad de que una parte sustancial de las finanzas internacionales pasen a control público y que con ello se rompa el poder de clase del capitalismo financiarizado*. Las altas finanzas españolas perderían uno de sus soportes principales y con ello una parte del poder político que han conseguido acumular en España desde la (última) quiebra de su sociedad del trabajo en la primera mitad de los años 1980. Esto provocaría el fin del bloque histórico monetarista que hizo la revolución pasiva de la transición y abriría la posibilidad de nuevas alianzas en torno a un proyecto de recomposición de la sociedad del trabajo. Por ahora la intervención masiva de los gobiernos lo ha podido evitar, aunque en algunos países con un precio político para el sistema

financiero. En Francia las fusiones de cajas y bancos y la inyección de dinero público van unidos al aumento de los políticos del gobierno y el Estado en la gestión de las instituciones afectadas. En Alemania se ha aprobado una ley que le permite al gobierno no sólo nacionalizar sino también expropiar a accionistas. Ni en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña y mucho menos aún en España, la clase rentista no ha sido aún (insistimos: *aún*) arrinconada por otras fracciones del bloque dominante. La razón es que el capital financiero y la economía de rentas tienen un peso relativo y un poder social mayor que en aquellos países. En España el poder de la banca, apoyada en su luna de miel con las clases populares, sigue siendo extraordinario y no hay un bloque social que aún pueda retarle. Sin embargo una agudización y una prolongación de la crisis podría generar un debilitamiento histórico de la clase rentista española. Esto depende en última instancia de las alternativas, es decir, de la capacidad de configurar un nuevo bloque histórico para ir a la creación de una sociedad del trabajo.

Nuevo bloque histórico para la creación de una nueva sociedad del trabajo

Hay varios escenarios y no sólo uno. La composición interna del nuevo bloque histórico es una cuestión abierta. Así, por ejemplo, el peso que tenga la democratización de la actividad empresarial y de la economía, los valores de uso y el cambio del modelo productivo en torno a los cuales tuviera lugar la reconstrucción de la nueva sociedad del trabajo (cañones o bicicletas, placas solares o centrales nucleares, servicios sociales o servicios militares etc.) dependerán de la correlación de fuerzas en el seno del bloque que las ponga en marcha. Una alianza entre el trabajo -organizado o no-, el sector crítico de los profesionales urbanos -incluidos los movimientos antiglobalización que están fuertemente unidos a ellos por lazos profesionales y de parentesco- y un sector innovador del empresariado generaría una alianza con posibilidades de evolucionar hacia metas socialistas más ambiciosas. Sin embargo, si esta

transformación se realiza desde arriba, como resultado de un pacto entre las élites políticas, las (nuevas) élites económicas e incluso de la parte más conservadora del movimiento obrero organizado, se pondrá en marcha una revolución pasiva sin perspectiva anticapitalista ninguna similar a la que tuvo lugar en los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez sin ser plenamente conscientes de ello esta es la fórmula que tienen en mente los políticos de centro que han abandonado los dogmas monetaristas y que apuestan por una *refundación del capitalismo* y un *segundo Bretton Woods*. Mi opinión es que incluso si la izquierda española, debilitada por sectarios y continuistas, no consiguiera liderar un bloque como el primero, se encontrará en una posición mucho mejor para conseguir reagruparse a medio plazo e intentarlo de nuevo si la economía de rentas es finalmente derrotada. Naturalmente siempre y cuando la crisis no conduzca a una situación excepcionalmente adversa como la que podría provocar de nuevo una exacerbación del conflicto nacional o un avance sustancial de la ultraderecha. Sea cual sea el escenario, la ruptura de la gran coalición monetarista sería un avance histórico en sí mismo y, especialmente si triunfa el primer bloque, obligaría a redefinir los grandes consensos de la transición de 1978. Estos podría incluir la revisión del modelo de Estado, su democratización, su re-legitimación así como la creación de una nueva identidad compartida que permitiría arrinconar tanto al nacionalismo central como al periférico en beneficio de planteamientos de clase. Entre otras cosas podría solucionar este problema abierto de la historia, el problema nacional, cuya persistencia siempre ha y seguirá perjudicando a la izquierda.

La creación de un nuevo modelo productivo basado en la dignificación del trabajo me parece una etapa intermedia fundamental para aspirar a cualquier objetivo más ambicioso de tipo socialista, incluso para avanzar hacia una reconversión ambiental y energética consecuente. Pero sería un error pensar que esto se puede conseguir sólo elevando los salarios –por ejemplo en el marco de una política tradicional de estímulo de la demanda- reduciendo la jornada de trabajo o la siniestralidad laboral. No se trata de remunerar mejor las

mismas tareas de bajo contenido creativo/dispositivo o de elevar las cualificaciones con políticas públicas de mejora de la educación a todos los niveles sin alterar dicho contenido. No: se trata además, al menos en el caso de España, de *aumentar sustancialmente la masa de tareas dispositivas, de elevar el contenido creativo de las mismas y de diseminarlas entre un número sustancial de puestos de trabajo y de sectores económicos*. Esto permitiría impulsar la democratización del espacio económico y empresarial. Por tanto es *en el marco de esta democratización* que la izquierda debería hacer su propia aportación (primero de las dos salidas) a la reconversión sectorial de la que estamos hablando. Esa reconversión tendría que ser social, energético-ambiental y territorial. Si la izquierda avanzara en esa dirección, podría generar mayorías estables para impulsar las profundas reformas (*reformas revolucionarias*) que requiere el país.

El sector público, apoyado y controlado por una red tupida de organizaciones y asociaciones ciudadanas que contrarreste el tejido capital capilar de la iglesia conservadora, tiene que hacer de catalizador del este proceso, dirigirlo políticamente y generar una buena parte de nuevo empleo de calidad. Tendría que aliarse con el sector más innovador del empresariado, también con una parte del empresariado vasco. Este parece un aliado estratégico no sólo por su especialización en productos de alto valor añadido, sino también por sus tradiciones colectivizantes y las consecuencias positivas que su alianza puede tener para la izquierda estatal en su enfrentamiento con los sectores más reaccionarios del empresariado, así como para la configuración de una nueva identidad compartida a nivel de todo el Estado al margen de los actuales nacionalismos central y periférico. El turismo de masas y la construcción, al menos la construcción de obra nueva, tienen que perder una parte de su peso en la estructura sectorial del país. Las energías renovables – preferentemente la solar-, los servicios sociales de calidad, la educación, la Investigación y el Desarrollo tienen que ganarlo. La banca privada tiene que ser sometida a un control público y ponerse al servicio de la economía productiva, dejar de estar al servicio de la renta y perder su capacidad de actuar como un

poder político en la sombra. Algo parecido sucedería con los bienes inmuebles que perderían su funcionalidad como valores de cambio en una sociedad del trabajo saneada, lo cual provocaría una reducción gradual de su precio y permitiría convertirlos en pisos de alquiler con garantía pública. Esto sería un poderoso estímulo para la emancipación de los jóvenes, la recuperación de la tasa de natalidad y para la elevación de la productividad total de los factores. La sociedad civil tiene que mejorar su participación en la gestión de las cajas de ahorro que tiene que hacerse más directa y transparente. El empleo y la progresividad fiscal mejorará la financiación de los ayuntamientos, una ley de financiación de partidos evitará que las cajas sean usadas para los trabajos de fontanería de los partidos políticos. Los ayuntamientos se verán liberados de la necesidad de hacer negocios inmobiliarios para crear empleo, sanear sus arcas y prestar servicios a los ciudadanos. Será el final de la corrupción y el destroz urbanísticos como fenómenos generalizados.

Pero el país tiene otra tarea pendiente: la redefinición de su geografía económica y productiva. El sector exterior no debe ser el área de expansión económica principal sino los mercados internos, más concretamente los circuitos económicos locales nucleados alrededor de las mancomunidades. El municipio y el distrito forman parte esencial de las tradiciones populares españolas. Además son espacios naturales de participación ciudadana, los lugar más asequibles para la incorporación de los ciudadanos a la vida pública. Pero para que estos puedan funcionar como tales, es necesario crear puestos de trabajo cerca de los espacios residenciales y generar nuevas infraestructuras de transporte sostenible que faciliten el desarrollo de los nuevos espacios de proximidad. Esto no sólo reducirá la factura energética, las emisiones con efecto invernadero, facilitará la cogestión ciudadana de la economía y las empresas y elevará la productividad total de los factores. Además reducirá los tiempos de desplazamiento al trabajo, facilitará la conciliación entre vida laboral y vida familiar y mejorará la calidad de vida. No habrá una verdadera reconversión energética y sectorial sin un cambio de la geografía económica, productiva y

residencial del país, un cambio que puede durar dos generaciones y generar una cantidad considerable de puestos de trabajo.

Europa y la izquierdas españolas

Este proyecto tienen que coordinarse con otros similares en el contexto europeo. Parece difícil que prospere si otros países como Alemania persisten en sus políticas agresivas de superávit de sus balanzas comerciales. La elevación de los salarios no generará puestos de trabajo en un país con un desempleo tan elevado como España, sino en los grandes centros productivos de Europa central si los grandes países exportadores no reorientan sus áreas de expansión económica hacia sus respectivos mercados interiores, por ejemplo elevando, a su vez, sus salarios y cancelando las estrategias competitivas de raíz neocorporativa. Si no se hace así, el aumento de los salarios en los países de la periferia como España generaría más consumo entre sus clases populares, pero los puestos de trabajo se crearían en los grandes centros productivos, lo cual reforzaría los actuales desequilibrios. Este es un reto importante para la izquierda europea –y también para los sindicatos- que deberían empezar a discutir seriamente estos temas. Hay que darle un perfil mucho más concreto a las propuestas de integración económica solidaria en la Unión Europea, definir mejor los mecanismos equilibradores de las balanzas comerciales pero también cancelar los proyectos neocompetitivos que hoy dominan la Confederación Europea de Sindicatos. Esto quiere decir que las tareas dispositivas no sólo tienen que aumentar en toda Europa sino que además tienen que distribuirse mejor entre todos sus países y regiones. Hoy, el grueso del trabajo creativo en Europa se concentra en una franja que comienza en el sur de Gran Bretaña, se extiende por el Benelux y el norte de Francia, baja hacia el sur siguiendo el cauce del Rin y parte del Ródano para torcer hacia el Este y morir en las provincias ricas del norte de Italia. Esta concentración se ha consolidado en las décadas de dominio neoliberal. No se podrá articular nunca un proyecto solidario en Europa si no se consigue cambiar esta geografía productiva,

desconcentrar decisiones políticas, económicas y tecnológicas acercando cada vez más decisiones a cada vez más regiones del Continente. La situación de emergencia que se ha desatado en Grecia y que acecha al resto de los países del sur de Europa, es expresión del carácter insostenible de esta situación de desequilibrios comerciales que el euro sólo ha sido capaz de maquillar pero nunca de suprimir. Nada de todo esto se podrá hacer si no se coordinan las políticas fiscales y si no se aplican muchas de las medidas que la izquierda europea viene proponiendo desde hace varios años: desde el aumento de los fondos de desarrollo regional hasta la democratización del Banco Central Europeo. La crisis genera tendencias centrífugas y una propensión al proteccionismo dentro de los países de la Unión Europea. Sin embargo, su rechazo desde la izquierda no contradice la necesidad de avanzar hacia la recomposición de circuitos económicos locales. El cosmopolitismo y la solidaridad no están reñidos con la cercanía y la reducción de la orientación exportadora de las economías.

Bibliografía

- Brenan, G.: *The Spanish Labyrinth*. Cambridge University Press, Cambridge 1943
- Comín Comín, F.: *Historia de la cooperación entre las cajas. La Confederación Española de Cajas de Ahorros*. Alianza, Madrid 2008
- European Comisión: *The Social Situation in the European Union 2005-2006*
- Fernández Stenko, A.: *Continuidad y ruptura en la modernización industrial de España*. CES, Madrid 1997
- Fernández Steinko, A.: *Espagne: le capitalisme des propriétaires fonciers à la recherche d'un aménagement du néolibéralisme*, en: *Espaces Marx: Classes sociales: retour ou renouveau?*
- Forniés Casals, J. F.: "Interpretación básica de la historia de las cajas de ahorros españolas" en: *Papeles de Economía Española*
- Malo de Molina, J.L. "Los retos de la economía española en la crisis financiera internacional". Servicio de Estudios del Banco de España, Madrid 2009
- Navarro, V. et al.: "La situación de la clase trabajadora en España", en *El Viejo Topo* nº253, marzo 2009
- Preston, P.: *Franco, caudillo de España*. Círculo de Lectores, Madrid 1994
- Recalde, A.: "La crisis financiera internacional y el crack financiero español", en: *Libertad Digital*, 2008
- Rodríguez, L. et. al.: *Manual del sistema financiero español*. Ariel, Barcelona 2008 (21ª edición actualizada).
- Titos, M.: "La respuesta histórica de las cajas de ahorros a las demandas de la sociedad española", en: *Papeles de Economía Española* nº1991
- Tortella, G.: *El desarrollo de la España contemporánea*. Alianza, Madrid 1994
- Davis, J. et al.: *The World Distribution of Household Wealth*. World Institute for Development Economic Research – United Nations University. Helsinki 2006. <http://www.iariw.org/papers/2006/davies.pdf>